

cional y a la vida democrática, cuando con esos delitos se contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional.

Por dichas razones, y coincidiendo en todos esos casos —artículo 210 bis, artículo 227 ter, y artículo 269 en la redacción que proponemos—, el bien jurídico tutelado, cual es la vigencia total y la supremacía constitucional, consideramos adecuado imponer una pena de cinco a quince años de reclusión o prisión, con inhabilitación absoluta perpetua, cuando el prevaricato se configure por el dictado de una resolución contraria al texto constitucional expreso.

Por otra parte, consideramos que también pueden ser sujetos activos de este delito, aquellos funcionarios, que aunque asuman el rol de parte en un proceso, están obligados a emitir su dictamen ante las autoridades. Es evidente que ellos también pueden traicionar los intereses del Estado o de la sociedad con el agravante que resulta de desconocer los preceptos constitucionales para la preservación del sistema democrático.

No debemos olvidar que el bien jurídico tutelado por esta infracción es el interés del Estado en la recta administración de la justicia, la cual puede ser perjudicada no sólo por la mala actuación deliberada de los jueces, sino también por la infiel actuación de ciertos sujetos cuya intervención en la causa es obligatoria.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara el presente proyecto de ley, solicitando su tratamiento y posterior aprobación.

Nilda C. Garré. — Melchor R. Cruchaga.  
— Pablo D. Fernández. — Carlos A. Alvarez. — Gustavo C. Galland. — Ramón H. Torres Molina. — Guillermo R. Aramburu. — Mario N. Fadel.

—A la Comisión de Legislación Penal.

1535-D-98

34

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º — Sustitúyanse el título III del Código Penal, así como todos los capítulos y artículos por él comprendidos, los que quedarán redactados en los siguientes términos:

### TÍTULO III

Delitos contra la libertad e integridad sexual de las personas

#### CAPÍTULO I

Violación, estupro y abuso deshonesto

Artículo 118: Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años el que por cualquier medio penetrare, anal o vaginalmente, en forma

total o parcial, a otra persona, aun en el marco de relaciones conyugales o de concubinato, en los casos siguientes:

1. Cuando la víctima fuere menor de doce años.
2. Cuando la víctima padeciere retardo mental evidente, o se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiese resistir.
3. Cuando el victimario hiciere uso de fuerza o intimidación.

Artículo 119: En los casos del artículo anterior, la reclusión o prisión será de ocho a veinte años cuando:

1. Resultare un grave daño en la salud de la víctima.
2. El hecho se cometiere por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor o encargado de la guarda de aquélla.
3. Existiere entre victimario y víctima una relación de poder, autoridad, confianza o dependencia.
4. El delito fuere cometido con el concurso de dos o más personas.
5. El delito sea utilizado como método de tortura.
6. Cuando el autor sea portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y tuviere conocimiento de ello.
7. Cuando el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad y el orden, en ejercicio de sus funciones.

Artículo 120: Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando la víctima fuere mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en las circunstancias de los incisos 2º y 3º del artículo 118.

Artículo 121: Se impondrá reclusión o prisión de seis a diez años cuando, en el caso del artículo anterior, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 119.

Artículo 122: Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco años cuando, en los casos de los artículos 118 y 120, resultare la muerte de la víctima.

Artículo 123: Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que abusare deshonestamente de otra persona, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 118, sin que haya penetración anal o vaginal.

La pena será de tres a diez años de reclusión o prisión, si el autor del hecho fuere alguna de las personas mencionadas en los incisos 2, 3 y 7 del artículo 119.

#### CAPÍTULO II

Acoso sexual y rufianismo

Artículo 124: Será sancionado con prisión de tres meses a dos años y destitución de su cargo la per-

sona que, con relación patronal, académica o escolar, o por motivos sociales o culturales, abuso de poder o privilegio sobre otra, acosare sexualmente a sus subordinados o dependientes.

Artículo 125: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años la persona que, mediante violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de coerción o intimidación, se hiciere mantener —total o parcialmente— por una persona que ejerza la prostitución, explotando las ganancias provenientes de esa actividad.

#### CAPÍTULO III

Prostitución, corrupción y ultrajes al pudor

Artículo 126: El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado:

1. Con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuera menor de doce años.
2. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si la víctima fuera mayor de doce años y menor de dieciocho.
3. Con prisión de dos a seis años, si la víctima fuera mayor de dieciocho años y menor de veintinueve.
4. Con reclusión o prisión de diez a quince años, cualquiera fuera la edad de la víctima, cuando:
  - a) Mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción;
  - b) El autor sea ascendiente, cónyuge, concubino, hermano, tutor o encargado de la guarda de aquélla;
  - c) Existiere entre victimario y víctima una relación de poder, autoridad, confianza o dependencia.

Artículo 127: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, siempre que mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

Artículo 128: El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona para que ejerza la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años. La pena se elevará a ocho años en su máximo, si mediare alguna de las circunstancias enumeradas en el inciso 4 del artículo 126.

Artículo 129: Será sancionado con prisión de dos a seis años el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes —reales o virtuales—, u objetos obscenos, y el que los expusiere, distri-

buyere o los hiciere circular, cuando para su producción se haya utilizado a un menor de edad.

Artículo 130: Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos el que ejecutare o hiciere ejecutar por otros exhibiciones obscenas, en lugares en donde sean vistos involuntariamente por terceros.

#### Capítulo IV

Rapto

Artículo 131: El que con miras deshonestas sustrajere o retuviere a una persona, será sancionado:

1. Con prisión de uno a cuatro años, cuando lo hiciere por medio de fuerza, intimidación, fraude.
2. Con prisión de seis meses a dos años, cuando la víctima fuere menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento.
3. Con prisión de dos a seis años, cuando la víctima fuera menor de doce años, con o sin su consentimiento.

#### Capítulo V

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

Artículo 132: Cuando la calidad de padre, tutor o curador sea elemento constitutivo o circunstancia agravante de los tipos penales previstos en este título, la condena recaída importará la privación de la patria potestad o interdicción perpetua de la tutela o curatela.

Artículo 133: Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos, cónyuges o convivientes y cualesquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza cooperaren en la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Norma Codoy.

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley intenta, por un lado, esquematizar un poco más ordenadamente los delitos tratados bajo este título; y por otro, adecuar la normativa de fondo a la cambiada sociedad en la que hoy se vive y a las exigencias que el derecho internacional nos impone, poniendo especial énfasis en respetar el principio de igualdad entre los sexos, y en brindar a los niños, niñas y adolescentes la protección jurídica que merecen.

En este camino, se ha analizado numerosa legislación comparada, doctrina nacional y extranjera y jurisprudencia sobre la materia, así como también se ha considerado fundamentalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer (aprobada por ley 23.179), y la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por ley 23.849), ambas a la jerarquía constitucional según los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (ordenada por ley 24.430).

#### El título

El título "Delitos contra la honestidad" con el que actualmente se identifican los delitos en tratamiento, viene siendo criticado desde hace tiempo y con razón por casi la totalidad de la doctrina especializada. En efecto, no sólo se relaciona con la moral (elemento propio de la esfera privada y ajeno a la intromisión del Estado), sino que además no refleja correctamente cuál es el bien jurídicamente protegido por las figuras que en él se agrupan.

Por otro lado, considero que se debe apuntar a eliminar de las figuras delictivas del Código Penal todo elemento que se asiente en consideraciones morales, carentes de certeza científica y que, por ser culturales, varían con las épocas y con las diferentes concepciones e interpretaciones.

Por ello, se lo modificó por el de "Delitos contra la libertad e integridad sexual de las personas", el cual —entendiendo—, identifica mucho mejor las conductas delictivas en tratamiento, sindicando a la libertad sexual y a la integridad sexual como bienes fundamentales de tutela jurídica.

#### Violación, estupro y abuso deshonesto

Una de las modificaciones más importantes incorporadas en este capítulo en la nueva descripción del delito de violación. Mediante ella, se amplía sensiblemente el espectro de conductas incluidas en el tipo penal, además de aventar toda duda y discusión respecto de la configuración del delito dentro de las relaciones conyugales o de concubinato.

Al hacer alusión a quien por "cualquier medio penetrare" a la víctima, quedan incluidos, además del órgano sexual masculino, cualquier otro tipo de objeto (palos, botellas, dedos, etcétera) que sean aptos para realizar tal acción. No cabe ninguna duda de que la afectación física y psicológica es exactamente la misma cualquiera fuere el elemento empleado por el autor. De esta manera, pueden ser sujetos activos tanto el hombre como la mujer.

Paralelamente, se limita la penetración a las vías anal o vaginal. Esto así porque, tal como ha venido resolviendo últimamente la jurisprudencia y como sostiene parte de la doctrina, considero que la *fellatio in ore* o coito bucal como se lo suele llamar, no llega a configurar este delito.

Si bien existe penetración (en el caso de que el autor sea un hombre), lo cierto es que los daños físicos seguramente no son los mismos que en los supuestos anteriores. A ello se le debe adunar que, como adelantara, sólo en el supuesto de que el victimario sea un hombre podríamos hablar de violación, mientras que la misma conducta desplegada por una mujer sólo constituirá un abuso deshonesto (la fisio-

logía humana así lo impone), todo lo cual lleva a una incongruencia jurídica inaceptable.

Otra de las modificaciones realizadas a la figura de la violación es el agregado expreso de que la misma se puede dar aun en el marco de relaciones conyugales o de concubinato.

Esto así porque, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, se ha venido discutiendo si la existencia de débito conyugal no impedía la configuración del delito dentro del matrimonio. La mayor parte de los autores y la jurisprudencia concuerdan —tal como está redactado actualmente el artículo—, que sólo habrá violación cuando se daba una exigencia abusiva por el modo en que se pretendiese realizar el acceso carnal o por el peligro que pudiese acarrear para la mujer.

Sin embargo, considero que no podemos confundir la existencia de un derecho con la forma de hacerlo valer. Aceptar que, en el caso de oposición a la unión sexual por parte de uno de los cónyuges, el restante pueda someterlo ejerciendo la violencia y por las vías de hecho, implicaría que el solo hecho de casarse convierte a los cónyuges en simples objetos de satisfacción sexual.

Tratándose de prestaciones de tinte netamente personal, una cuestión de respeto a la personalidad física y moral impide que se puedan exigir forzadamente. Desde el momento en que existe un orden jurídico, queda vedado a las personas el hacer valer sus derechos por mano propia; el que lo hiciera, comete un delito.

Por su lado, tal como ya lo propusiera en otro proyecto de modificación a este artículo en particular, de la figura de estupro se ha eliminado el requisito típico de "mujer honesta" que debe revestir actualmente la víctima.

Reitero en este punto que el concepto no es claro, desde el momento en que no se puede determinar con la precisión que una norma penal requiere, qué es una "mujer honesta", prestándose a disímiles interpretaciones.

A ello hay que agregarle que el artículo 120 en su actual redacción no brinda la protección debida a los menores de entre doce y quince años que no fueran mujeres, y no cabe duda alguna que la situación fáctica es exactamente la misma ante una mujer o un varón en la consumación del delito.

Teniendo en consideración que tanto la mujer como el varón pueden ser víctimas de violación, no parece razonable penar el estupro sólo en los supuestos de víctimas mujeres.

En lo que a agravantes respecta, en ambas conductas —violación y estupro—, se han incluido a las ya existentes otras circunstancias de calificación, relacionadas fundamentalmente con la calidad de la relación víctima-victimario, la finalidad del autor al cometer el delito, la transmisión de una enfermedad grave y la calidad del autor, situaciones todas en las que, ya sea por el mayor perjuicio causado o por el mayor grado de desprotección de los damnificados, se justifica la elevación del monto de la pena a imponer.

Finalmente, manteniendo el criterio sustentado en otro proyecto ya presentado, propongo la derogación de la ila-

mada "violación fraudulenta" (actualmente prevista y reprimida por el artículo 121 del Código Penal).

No puede desconocerse que cuando se incorporó esta figura al Código Penal argentino, se lo hizo en razón del gran flujo migratorio y la proporcional cantidad de matrimonios por poder que en aquel entonces se concertaban. Esta circunstancia hacía factible el error de la mujer que prestaba consentimiento a quien creía su marido cuando en realidad éste no lo era, dado que el único contacto previo al conocimiento personal de ambos era epistolar.

Hoy por hoy, queda fuera de discusión que los motivos históricos que permitieran —en su momento—, la perpetración de conductas como la presente han desaparecido por completo. No sólo no existe el flujo migratorio de aquella época, sino que además, los avances tecnológicos logrados impiden suponer la imposibilidad del conocimiento previo al contacto personal.

#### Acoso sexual y rufianismo

La figura del acoso sexual penaliza toda forma de presión sexual no deseada que se dé en el ámbito del trabajo, el colegio, la universidad, etcétera, en virtud de la cual la víctima pueda desempeñar su labor en un ambiente hostil, se vea perjudicada en sus ascensos y promociones, se vea obligada a renunciar, etcétera.

Desde el momento en que toda persona tiene el derecho —constitucionalmente reconocido—, a la libertad de trabajo, la igualdad de trato y la dignidad, toda actividad que atente contra los mismos constituye un delito y, por tanto, debe ser pasible de una pena.

Respecto del rufianismo, sólo es dable hacer hincapié en que la configuración del tipo requiere de un atentado contra la libertad sexual de la víctima, de manera que sólo nos encontraremos ante tal injusto cuando el autor actúe en contra de la voluntad de esta última.

#### Prostitución, corrupción y ultrajes al pudor

Los puntos más salientes de estas figuras los encontramos en la disminución a veintidós años de la edad máxima prevista en el inciso 3º (de manera de equipararla a la mayoría de edad del Código Civil) y en el agregado de otras circunstancias agravantes al último párrafo del actual artículo 125.

Se modificó el actual artículo 127 bis, el cual limitaba la calidad de víctima a las mujeres y a los menores, ampliándolo a toda persona, mayor o menor, cualquiera fuere su sexo.

Se limitó, por otro lado, la configuración del delito previsto por el actual artículo 128, al supuesto en el cual se utilice a un menor de edad en la producción de los objetos obscenos.

Finalmente, se simplificó la redacción del actual artículo 129 a la descripción concreta de la conducta prohibida, sin importar el lugar en el que se realice la misma.

#### Rapto

Sólo se reelaboraron los dos artículos actualmente vigentes, abarcándoselos en uno solo que —entendiendo—,

describe más claramente la actividad vedada, eliminándose —por otro lado—, el agravante de la calidad de mujer casada, la cual considero, no encuentra justificativo razonable.

#### Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

En primer lugar, se pretende derogar la exención de pena prevista en el artículo 132 del actual Código Penal, por entender que los motivos que en su momento la inspiraron (cuales eran la de resguardar el buen nombre y honor de la familia de la víctima), ya no pueden ser considerados.

Al margen de ello, implica aceptar un riesgo razonable: que, con el afán del autor y sus partícipes de conseguir la exención de pena prometida, la víctima se vea forzada a un matrimonio no querido.

En su reemplazo se incorporaron las penas accesorias de privación de la patria potestad e interdicción perpetua de la tutela o curatela, en todos aquellos casos en que la calidad de padre, tutor o curador sea elemento constitutivo o circunstancia agravante del tipo penal.

Por los fundamentos expuestos es que solicito a los distinguidos miembros de esta Honorable Cámara, que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.

Norma Godoy.

—A las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad.

35

#### Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

#### RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se informe sobre los puntos que se detallan a continuación, remitiéndose en cada caso la documentación que se solicita:

1º—Se adjunte copia de los listados de personal de esa dependencia que fueron destinados a prestar servicios en los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social y/o en la Cámara Federal de la Seguridad Social o en cualquier dependencia judicial que directa o indirectamente se vincule con el fuero nombrado.

2º—Se informe las tareas que les fueron destinadas a dichos agentes, órdenes impartidas e instrucciones dadas para su cumplimiento. Se especifique claramente, individualizándose por cada agente el lugar físico donde presta o prestó servicios (juzgado, secretaría, sala, etcétera).

Sobre este punto en particular se requiere, además se informe sobre las siguientes cuestiones:

a) Nombre y apellido, número de legajo, antigüedad y categoría del funcionario responsable de organizar y supervisar las tareas efectuadas en jurisdicción del Poder Judicial;